

Radio Metrópoli 23/06/2017. ¿Para qué espía el gobierno a periodistas y defensores?

El Centro Prodh, uno de los centros espíados por el gobierno, según el informe “Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, elaborado por Article 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales y Socialtic, del que diera cuenta el New York Times y que tanto revuelo ha provocado en estos días, hizo un comunicado de prensa en el que detalla la denuncia contra el gobierno espía y el apoyo y solidaridad de más de 200 organizaciones latinoamericanas y de otros países, así como de infinidad de personas que han firmado el pronunciamiento contra las acciones de #GobiernoEspía y exigen rendición de cuentas.

En el fondo, nos preguntamos, no sin cierta ironía, ¿para qué espía el gobierno a ciertos periodistas y a ciertas personas defensoras de los derechos humanos? Y decimos “ciertos”, porque es evidente que no a todos los periodistas ni a todos los defensores espía. Sabemos que la policía política del gobierno ha operado siempre, a veces de maneras muy burdas y recientemente, con la más sofisticada tecnología del malware Pegasus.

En el contexto que vivimos en Jalisco, donde también se han hecho denuncias por el equipo de espionaje comprado por el gobierno del estado, cobra relevancia el espionaje contra periodistas y activistas, porque se prepara el relevo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Dice el Pro:

“El principal método de infección, documentado tanto por Citizen Lab como por las organizaciones, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group. Según reportes de The New York Times (NYT), cada licencia de infección tendría un costo alrededor de \$77,000.00 dólares americanos (o cerca de un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario público). En total se han registrado 88 mensajes con enlaces maliciosos.”

Casi 125 millones de pesos que usted y yo aportamos a la hacienda pública con nuestros impuestos. Lo que indigna es que, en cambio, al Mecanismo de Protección, el Presupuesto de Egresos 2017 no le asignó un solo centavo. Para espiarlos sí hay dinero y hasta de sobra, pero para protegerlos, nada de nada. ¿Qué nos dice esta realidad del gobierno?

Dice el comunicado del Centro Prodh: “Estos casos de vigilancia a los activistas por el derecho a la salud constituyeron un detonante para que la sociedad civil mexicana se retirara del mecanismo de co-construcción con el Gobierno Federal y el INAI en el proceso de la Alianza para el Gobierno Abierto.” Una situación que hace repensar la contradicción de querer y desear un Gobierno Abierto, pero que ese mismo gobierno espía a periodistas y activistas.

Las declaraciones oficiales en respuesta al reportaje del NYT son infantiles, porque decir que no hay pruebas es porque no tienen argumentos para responder a este informe contundente, pues hay contratos y son tres dependencias gubernamentales que han comprado esta tecnología, la PGR, el CISEN y la Sedena. Invitan a los denunciantes a presentar denuncia y, claro, ya presentaron denuncia ante la PGR y solicitaron medidas cautelares a la CNDH. Además, también como medida de protección, han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos. El comunicado del Centro Prodh afirma con toda razón: “Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta. Por lo tanto, las organizaciones firmantes se suman al rechazo de la sociedad civil ante este nuevo ataque en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos. Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales. Asimismo, exigimos las reformas legales

necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.”¹

¿Tendremos en Jalisco una verdadera defensoría del pueblo de Jalisco? O, como ha ocurrido en los últimos 10 años, ¿una tapadera de los gobiernos en turno?

¹ Centro Prodh, Más de 200 organizaciones de Latinoamérica rechazan acciones de #GobiernoEspía y exigen rendición de cuentas, en http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2401:2017-06-21-19-16-58&catid=209:front-rokstories&lang=es Vi el 22 de junio de 2017